



Análisis de coyuntura

De tropiezo en tropiezo, pero camina

IPNUSAC

El acontecer político nacional durante la breve segunda parte de febrero estuvo marcado por los nuevos traspiés del gobierno del presidente Alejandro Giammattei en lo relacionado con la epidemia del COVID-19 y por la primera muestra de capacidad de movilización callejera del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) desde que se inició la pandemia. Protesta que fue seguida por otras manifestaciones menores en la ciudad de Guatemala, que denotan la latencia del malestar social y prefiguran lo que podría ser un año cargado de episodios recurrentes de manifestaciones en plazas y calles. Sin embargo, lo más relevante es el constante y al parecer incontenible avance del proyecto de restauración conservadora, impulsado por la coalición que gobierna a los poderes Ejecutivo y Legislativo, que mantiene bajo su férula al Judicial, y ahora se apresta a tomar control de la Corte de Constitucionalidad (CC), cuyos nuevos magistrados deben asumir el próximo 14 de abril y para lo cual en estos días se desarrollan trastravillantes procesos de designación.

Tropiezos con la pandemia

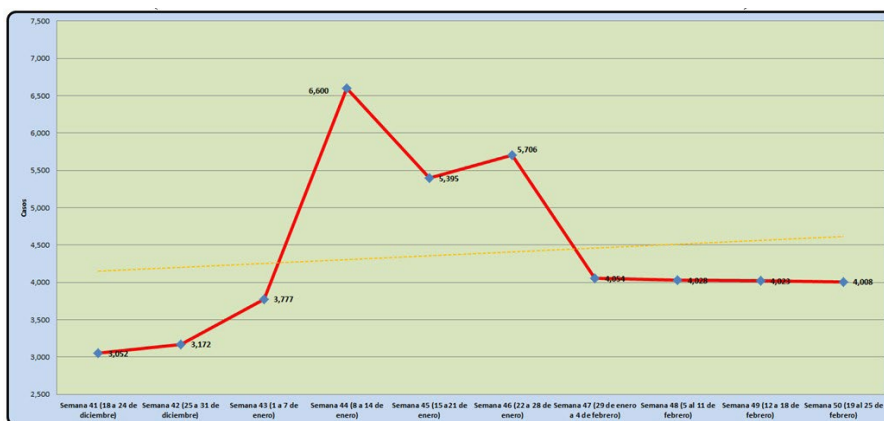
A juzgar por las estadísticas oficiales –las únicas disponibles– en la segunda parte de febrero se mantuvo la tendencia al lento reflujo de casos nuevos de

COVID-19. Como puede verse en la gráfica siguiente, durante la semana 50 de la epidemia (contada a partir del primer caso en territorio nacional, el 13 de marzo de 2020) hubo apenas 15 casos nuevos menos que en la semana anterior.

Gráfica 1

Casos nuevos por semana*

(Del 18 de diciembre de 2020 al 25 de febrero de 2021)



Fuente: elaboración propia, con datos del MSPAS.

*Nota: La primera semana de la epidemia en Guatemala fue entre el 13 de marzo (fecha del primer contagio en el país) y el 19 de ese mismo mes en 2020; aquí incluimos solamente las últimas diez semanas de la serie, siguiendo el correlativo iniciado en marzo de 2020.

La gráfica muestra también que en febrero los contagios nuevos oficialmente registrados se estabilizaron levemente por arriba de cuatro mil semanales, sin que logre bajarse hacia la franja siguiente de tres mil casos nuevos por semana,

de la que se está todavía lejos y a la que casi se llegó en la última semana de diciembre de 2020 (el país tuvo por primera vez más de tres mil casos nuevos –3,307– en la semana 14, entre el 12 y el 18 de junio de 2020¹).

1. De hecho, junio de 2020 fue el primer mes de la escalada de la epidemia en Guatemala. Véase *Revista Análisis de la Realidad Nacional, edición digital* No. 187, 16 a 30 de junio de 2020, en especial páginas 10-12, accesible en <http://ipn.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2020/07/IPN-RD-187.pdf>

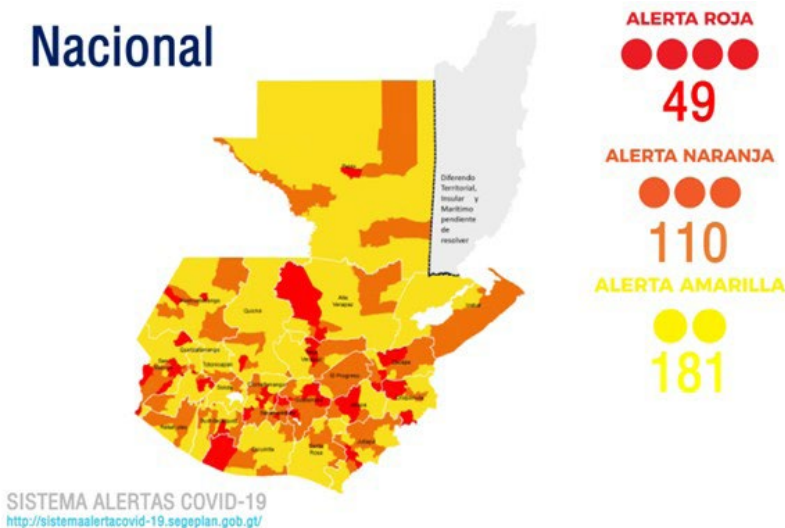
A pesar de que las cifras globales para el país sugieren aún una alta prevalencia del contagio, el seguimiento de casos por municipios y por departamentos realizado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencias Social (MSPAS), ha permitido que en el

tablero de alertas (véase infografía 1), hasta el 20 de febrero solamente 49 municipios se encontraban en alerta roja (frente a los 206 municipios que estaban en esa condición en agosto de 2020), 110 están en alerta naranja y 181 llegaron ya a alerta amarilla).

Infografía 1

Tablero de alertas sanitarias covid-19

Al 20 de febrero de 2021



Fuente: tomado de <https://covid19.gob.gt/semaforo.html>

De dar crédito a la estadística oficial –la cual ha estado señalada constantemente de estar afectada por un alto subregistro– el país

marcha por buen camino y eso explicaría, también, la extendida percepción de relajamiento y apertura de la totalidad de

actividades económicas, y la próxima liberalización en ámbitos de la vida social aún restringidos, como los educativos, deportivos, religiosos y de espectáculos masivos.

Y no obstante que las anteriores podrían ser “buenas noticias” para y desde el gobierno, este ha tenido serios traspies otra vez por el COVID-19, ahora en el sensitivo asunto de las vacunas y por el escándalo destapado sobre la estafa de que habría sido víctima el MSPAS con un lote de pruebas.

En el primero de esos aspectos ya en nuestra edición anterior habíamos hecho notar el limbo en que estaba entrando el país sobre la llegada de las vacunas y el inicio del publicitado plan nacional de vacunación. Lo que ya se intuía hace dos semanas² ocurrió: el anuncio hecho por Giammattei a finales de enero, y reiterado el 9 de febrero, resultó desmentido por la realidad. Y en un típico arranque suyo, el gobernante pasó del triunfalismo de sus anuncios

previos a la descalificación lapidaria del Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (Covax, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Desde el principio yo vi este mecanismo (Covax) con mucha reticencia, pero la ministra de Salud (Amelia Flores) y la COPRECOVID (Comisión Presidencial para prevenir el COVID-19, dirigida por Edwin Asturias) insistieron en ello. Yo no sigo creyendo en ese mecanismo”, afirmó Giammattei el 24 de febrero, según le citó el diario digital *Soy502*.³

Según esa misma fuente, el Ministerio de Relaciones Exteriores envió un oficio a la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (GAVI) en la que se muestra el descontento de las autoridades guatemaltecas, pero la representación de la OMS en Guatemala dijo que no habría ninguna reacción pública a las declaraciones presidenciales y de la cancillería.⁴ En cambio, el ex director de la COPRECOVID, sin

2. Véase Revista Análisis de la Realidad Nacional, edición digital No. 199, página 13. Disponible en <http://ipn.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2021/02/IPN-RD-199.pdf>

3. <https://www.soy502.com/articulo/giammattei-vacunas-covax-fueron-mentira-descarada-100931> ; <https://lahora.gt/giammattei-por-retraso-covax-salud-y-coprecovid-insistieron-en-el-mecanismo/>

4. Soy502, 24 de febrero de 2021, “OMS no responderá a Giammattei por criticar mecanismo Covax”. Véase en <https://www.soy502.com/articulo/oms-no-respondera-giammattei-criticar-mecanismo-covax-100931>

llegar a la polémica respondió al mandatario a través de su cuenta de Twitter: “Excusatio petita: De no ser por la #Coprecovid y el equipo de la #MinistraFlores del @MinSaludGuate los guatemaltecos posiblemente habrían recibido #COVID19Vaccine hasta Septiembre 2021”.⁵

Así, entre esos dimes y diretes, el gobierno salió parcialmente del sofoco –que no de la nueva erosión a su credibilidad– con una oportuna donación de cinco mil vacunas llegadas de Israel el 25 de febrero, que permitió iniciar la vacunación a trabajadores de la salud en los hospitales que atienden directamente a pacientes de COVID-19, desde el día siguiente. Adicionalmente, en la línea de revertir el tropiezo de Covax, el gobierno anunció que gracias a otra donación, hecha por India, el 2 de marzo llegarán 200 mil dosis, que permitirá vacunar a 100 mil personas. También se anunció que el primer lote adquirido a través de Covax, de unas 81 mil 600 vacunas, llegaría el 15 de marzo,

fecha en que también se espera la llegada de una tercera donación, esta de la vacuna rusa Sputnik V.⁶

No menos bochornoso es el tropiezo del gobierno con el manejo divergente de un caso de adquisición de pruebas falsas para la detección del COVID-19, que se destinaría a hospitales de Huehuetenango y Chimaltenango. El fraude, por Q 7.35 millones y del cual dieron amplia información medios nacionales e internacionales, puso de nuevo en posiciones distintas a la ministra Flores y al presidente Giammattei, pues mientras la primera acudió al Ministerio Público (MP) para hacer la denuncia penal correspondiente, el mandatario consideró –basándose en lo investigado por la Comisión Presidencial contra la Corrupción– que más bien se trató de un caso de “irresponsabilidad administrativa de alguien que se hizo el loco y cobró las fianzas de un contrato”.⁷

Estas discrepancias –que, sumadas los tropiezos de las vacunas,

5. <https://twitter.com/easturia/status/1364888790234374154>

6. “India donará vacuna a Guatemala para inmunizar a 100 mil personas que laboran en la primera línea”, Prensa Libre, 26 de febrero de 2021. <https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/india-donara-vacuna-a-guatemala-para-inmunizar-a-100-mil-personas-que-laboran-en-la-primera-linea/>

7. “Pruebas falsas: Giammattei cuestiona investigación de Salud y dice que ‘el origen del problema’ es otro”, Prensa Libre, 24 de febrero de 2021. Véase <https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/pruebas-falsas-giammattei-cuestiona-investigacion-de-salud-y-dice-que-el-origen-del-problema-es-otro-breaking/>

podrían poner a la ministra Flores en la cuerda floja de su eventual relevo— despertaron de nueva cuenta las suspicacias sobre la corrupción en el gobierno de Giammattei, pues en este caso resultó implicado Ronaldo Estrada Rivera, viceministro del Deporte y la Recreación, del Ministerio de Cultura y Deportes. El funcionario se desempeñaba como gerente financiero del MSPAS cuando se realizó la adquisición de las pruebas falsas, y en medios periodísticos se ha dicho que formaría parte del círculo de allegados a Miguel Martínez, ex director del polémico Centro de Gobierno, que Giammattei se vio forzado a disolver en diciembre pasado, en medio de las turbulencias políticas e institucionales de noviembre de 2020.

Ejercitando el músculo movilizador

En el acontecer sociopolítico nacional de los últimos trece días de febrero tuvo relevancia la movilización callejera convocada por CODECA en ciudad de Guatemala, el 18 de febrero. Se trató de la primera movilización de este tipo convocada por esta organización en mucho tiempo, lo cual tiene connotaciones importantes en el momento que

vive el país. En primer lugar, destaca que se trató de un esfuerzo humano y logístico que deja constancia de la capacidad de convocatoria organizada, notoriamente distante de otros colectivos de composición social similar.

No solo fue relevante el número de participantes en las cuatro columnas que confluyeron hacia el centro capitalino, sino también toda la coreografía política que se desarrolló en torno a la marcha: visita y entrega de peticiones al Tribunal Supremo Electoral; parada ante el MP—de cuya titular, Consuelo Porras, se exigió la renuncia—; entrega simbólica en inmediaciones del Congreso de la República, de un proyecto de iniciativa de Ley de Nacionalización de los servicios estratégicos; y mitin multitudinario en la plaza central, con protagonismo de Thelma Cabrera, ex candidata presidencial del partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), así como la promoción de la demanda de renuncia del presidente Giammattei y la convocatoria a una asamblea constituyente del Estado plurinacional.

Más allá del “realismo” inmediato de estas demandas, no escapa al ojo de los observadores el hecho

de que la marcha de CODECA actualiza la combinación de varias formas de lucha: desde el uso activo de las redes de comunicación digital (activismo en redes) y la presencia física tangible de las bases de la organización hasta su proyección electoral con la vista puesta en los comicios generales del ya no tan lejano segundo semestre de 2023. Se trató de un ejercicio del músculo organizativo-movilizador, seguido en los días posteriores de asambleas regionales y departamentales ostensiblemente orientadas a incrementar la base orgánica tanto de CODECA como de su brazo partidario, el MLP.

Pero el asunto trasciende a una peculiar forma de concebir y practicar la acumulación de fuerzas, pues la marcha de CODECA fue una entre varias expresiones (por mucho la más notoria) de un ambiente de próxima ebullición social: las manifestaciones de veteranos militares exigiendo el cumplimiento de promesas electorales de Giammattei en torno a su reclamado resarcimiento económico y la protesta de los taxistas en contra de la exigencia de que paguen un seguro de daño a terceros. A esas expresiones de la sociedad en movimiento, cabe agregar los actos realizados el 25 de febrero en la plaza central

capitalina y otros lugares en ocasión del Día de Dignificación de las Víctimas del conflicto armado interno. Todo esto parece prefigurar un verano con altas temperaturas del descontento social.

Y sin embargo, camina...

Pero ni los tropiezos de la pandemia ni las intermitentes muestras de descontento social han podido apartar a la alianza conservadora reinante —políticos de múltiple pelaje de derecha, grandes empresarios y sus organizaciones cupulares, defensores de ex funcionarios encartados en procesos legales por corrupción y de personajes con reconocidos vínculos con el crimen organizado— de su designio de hacer el asalto final a la Corte de Constitucionalidad.

Dado que tres de los cinco magistrados titulares e igual número de suplentes del tribunal constitucional son nombrados por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se da por descontado que la designación recaiga sobre juristas claramente afines al sesgo conservador de esa alianza. Solamente en los procesos de designación en el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos

y en el Colegio de Abogados y Notarios (CANG) cabría esperar la elección de magistrados independientes. Pero los amparos legales que obligaron al CSU a considerar a una docena de candidatos previamente excluidos –sumados a las órdenes de captura promovidas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) contra dos integrantes del órgano de gobierno universitario, el rector Murphy Paiz, y el ex rector Estuardo Gálvez– ilustran las complicaciones que tiene ya la designación de los magistrados por parte de la USAC.

A su vez, los resultados de la primera vuelta de la elección en el CANG –efectuada el 25 de febrero– no permiten suponer que quien resulte designado esté muy alejado la orientación oficialista:

quien obtuvo la primera mayoría, el ex presidente de la CSJ, Néster Vásquez, podría ser confirmado en una segunda ronda, a su vez impregnada por la nebulosa porque la segunda mayoría la obtuvo el ex rector Gálvez, contra quien –como ya se dijo– se giró orden de captura.

En tales circunstancias, la duda no es si la coalición restauradora tendrá éxito en su propósito de tomarse la CC, sino si podrá hacerlo –como escribió un columnista de prensa– “a cartón lleno”, en esta lotería de la justicia constitucional donde lo que está en juego es, precisamente, la consolidación del proyecto económico, social y político favorable a los intereses del gran capital oligopólico, dominante en Guatemala durante muchas décadas.